

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA - DEFENSORÍA DEL PUEBLO


Modifíquese el artículo 2°. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. PROYECTO DE LEY N° 102/2025 CÁMARA Y 083/2025 SENADO "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026".


Modifíquese el 2. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones como sigue:

ADICIÓNENSE al presupuesto de la sección **2502 DEFENSORÍA DEL PUEBLO**, la suma de \$90.988.933.734 (noventa mil novecientos ochenta y ocho millones novecientos treinta y tres mil setecientos treinta y cuatro), distribuyendo para el literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO la suma de \$44.619.738.975 (cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve millones setecientos treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos) y el literal C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN la suma de \$46.369.194.759 (cuarenta y seis mil trescientos sesenta y nueve millones ciento noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos) moneda corriente. Lo anterior, con el objetivo de lograr la ejecución y distribución de las líneas de financiamiento e inversión, que atienden el carácter misional de la Defensoría del Pueblo.

REDÚZCASE el literal B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN la suma de **\$90.988.933.734** (noventa mil novecientos ochenta y ocho millones novecientos treinta y tres mil setecientos treinta y cuatro), de la sección **1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, CTA PROG 1302. Esto con el fin de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de la Defensoría del Pueblo.

Cordialmente,


ETNA TÁMARA ARGOTE CALDERÓN
Representante a la Cámara por Bogotá
Pacto Histórico PDA

	
COMISIÓN CUARTA	
CAMARA DE REPRESENTANTES	
Recibido Por:	<u>LWT 2</u>
Fecha:	<u>20-SEPT/2025</u>
Hora:	<u>8:59 AM</u>
Número de Radicado:	<u>316</u>

Justificación

La Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de promover, ejercer y divulgar los derechos humanos (artículo 282 de la Constitución). Hace parte del Ministerio Público, y desarrolla sus funciones con autonomía administrativa y presupuestal, lo que le permite planificar y ejecutar sus funciones con total autonomía (artículo 283 de la Constitución).

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Colombia regida por los estándares internacionales establecidos por los Principios de París. En armonía con el diseño constitucional, estos principios exigen que las INDH cuenten con independencia, pluralismo y autonomía funcional, lo cual solo es posible si se garantiza una financiación suficiente y sostenible. La financiación no es un aspecto técnico, sino una condición estructural que asegura la legitimidad y la capacidad operativa de la Defensoría para proteger los derechos humanos de forma efectiva.

En estas condiciones, el respeto por la autonomía técnica, presupuestal y administrativa de la Defensoría del Pueblo es una expresión del principio constitucional superior de separación de poderes en un marco de colaboración armónica (artículo 113 de la Constitución).

Para ser eficaz en su función constitucional, la Defensoría del Pueblo necesita una financiación adecuada. Requiere de personal capacitado, infraestructura, tecnología y presencia territorial, lo que implica dar condiciones materiales a las defensorías regionales, atender a víctimas del conflicto armado, formar en derechos humanos y elaborar informes de advertencia, entre otros servicios que se ofrecen principalmente a la ciudadanía y propicia el ejercicio de derechos fundamentales de todas las personas, especialmente la más vulnerables y de protección constitucional. Sin los recursos necesarios, la Defensoría corre el riesgo de perder su eficacia material, sin capacidad real de incidencia en la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior.

En el anteproyecto presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en marzo de 2025, la Defensoría del Pueblo proyectó un presupuesto total para la vigencia 2026 de \$1.344.432.191.048, de los cuales \$1.192.580.484.250 correspondían a funcionamiento y \$151.851.706.798 a inversión, solicitando recursos adicionales indispensables para garantizar la operación de la entidad y el cumplimiento de su misión constitucional.

En consecuencia, frente a la necesidad de \$1.344.432.191.048, se identifica un déficit de \$129.984.191.048. Estos recursos resultan indispensables para garantizar el cumplimiento de funciones misionales y compromisos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, ya que su ausencia impactaría directamente en los siguientes aspectos:

- El mantenimiento de la capacidad del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), evitando una reducción de su capacidad de advertencia frente a los riesgos que enfrentan las comunidades en el territorio. Un debilitamiento de este sistema afectaría el cumplimiento de propósitos fijados en sentencias de la Corte Constitucional como la SU-546 de 2023, la SU-020 de 2022 y la T-025 de 2004.
- La capacidad de respuesta humanitaria de la Defensoría del Pueblo en contextos de alta presencia de grupos armados y criminalidad organizada, que afectan gravemente los derechos de las comunidades más vulnerables en zonas con baja presencia institucional. Actualmente, 391 municipios de los 32 departamentos tienen una alerta temprana vigente por riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. A ello se suman las alertas nacionales de tipo electoral y las relacionadas con líderes sociales, que amplían la cobertura territorial de los riesgos advertidos. Este escenario se agrava por la reducción de la presencia de organismos humanitarios internacionales y de la cooperación internacional, lo que hace necesario contar con una Defensoría fuerte y con despliegue territorial suficiente, especialmente ante los riesgos incrementados en el contexto electoral de 2026.
- La atención oportuna a víctimas de violencia de género mediante las duplas de profesionales jurídicos y psicosociales. La reducción de estos equipos limitaría la respuesta institucional a mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que han sido víctimas de violencias basadas en género o prejuicio, en el marco de la emergencia nacional de género declarada en el Plan Nacional de Desarrollo.
- La atención a víctimas del conflicto armado y la presencia de defensores comunitarios, cuyo fortalecimiento constituye un compromiso del Estado en la sentencia T-025 de 2004, en el Acuerdo Final de Paz y en el Acto Legislativo 02 de 2017. La reducción de estos recursos impactaría directamente en la atención de desplazamientos individuales y masivos, la toma de declaraciones y el acompañamiento jurídico y psicológico en las regiones más afectadas por la confrontación armada.
- El trabajo proyectado con jóvenes para ofrecer entornos protectores, acompañamiento psicosocial y apoyo a sus iniciativas artísticas, deportivas y culturales, acciones clave para prevenir el reclutamiento forzado y garantizarles oportunidades de desarrollo y un mejor futuro.
- Las acciones de prevención de la deforestación y el acompañamiento a líderes y comunidades en la defensa de los derechos ambientales y de la naturaleza, así como la capacidad institucional para afrontar los efectos del cambio climático, incluyendo los fenómenos de movilidad humana asociados a este.
- El acompañamiento a migrantes extranjeros y connacionales que enfrentan crisis migratorias que afectan sus derechos humanos, lo cual requiere una presencia activa de la Defensoría para garantizar su protección.
- La supervisión y acompañamiento a personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y centros de detención transitoria, tareas esenciales para la protección de sus derechos en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.

- La atención de quejas, reclamos y acciones judiciales encaminadas a mitigar la crisis del derecho a la salud, cuyas quejas han aumentado en un 74% en los últimos dos años.
- La prestación del servicio de defensa pública, componente fundamental del sistema de justicia, que garantiza el acceso a representación jurídica a miles de personas que carecen de medios económicos para acceder a un abogado de confianza.
- La adquisición de nuevas sedes, orientada a ampliar la cobertura territorial de la entidad y fortalecer su presencia en regiones con alta demanda de servicios y necesidades de atención prioritaria.
- El mantenimiento de las sedes existentes es fundamental para conservar condiciones adecuadas de infraestructura, seguridad y accesibilidad, asegurando espacios dignos y funcionales para la atención de la ciudadanía y el desarrollo eficiente de las actividades misionales.
- La modernización tecnológica y la dotación de mobiliario y equipos en las sedes regionales y en la sede nacional, que comprenden la actualización de equipos de cómputo, redes, sistemas de información y herramientas digitales. Estas acciones buscan optimizar los procesos internos, fortalecer la gestión documental, facilitar la atención virtual, mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar espacios de atención adecuados para los usuarios.

Adicionalmente, en lo corrido de 2025, se observa una buena ejecución de recursos en la Defensoría del Pueblo, como se evidencia en el cuadro a continuación, en el que se indica que con corte a agosto se cuenta con una ejecución a nivel de compromisos de 56% en funcionamiento y 74% en inversión, comportamiento favorable que se mantiene si se hace el análisis en ejecución por obligaciones la cual se ubica en 47% en funcionamiento y 21% en inversión.

Fuente de recursos	Apropiación	Compromisos	% Ejecución Compromisos	Obligaciones	% Ejecución Obligaciones
FUNCIONAMIENTO	1.130.439	633.361	56,0%	538.510	47,64%
Gastos de Personal	406.269	254.108	62,5%	254.076	62,54%
Adquisición de Bienes y Servicios	32.848	24.740	75,3%	16.980	51,69%
Defensoría Pública	306.527	254.536	83,0%	181.455	59,20%
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos	378.586	97.487	25,8%	84.632	22,35%
Otros	6.209	2.491	40,1%	1.368	22,03%
INVERSIÓN	122.300	91.151	74,6%	25.748	21,05%
Exigibilidad	54.500	36.234	66,5%	14.803	27,16%
Víctimas	26.592	17.850	67,1%	8.596	32,33%
Sistema Integrado de Gestión	4.500	3.989	88,6%	1.243	27,62%
Modernización Infraestructura	29.208	25.578	87,6%	1.105	3,78%
Cesar	7.500	7.500	100,0%	0	0,00%
Total	1.252.739	724.512	57,8%	564.259	45,04%

Fuente: SIIF corte agosto de 2025

Para concluir, resulta evidente que estos recursos son esenciales para que la Defensoría del Pueblo pueda cumplir efectivamente con su misión de promover, proteger y defender los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

en Colombia, así como para fortalecer su presencia y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA - RAMA JUDICIAL

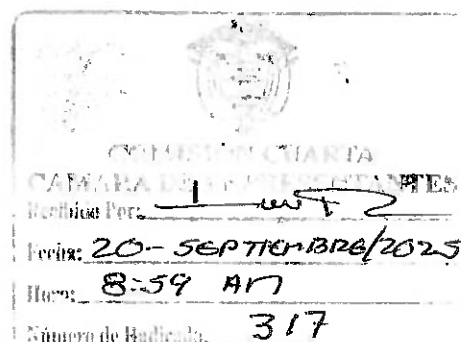
En virtud de lo establecido en la Ley 5° de 1992 me permito presentar proposición modificatoria al Proyecto de Ley 102/2025 Cámara y 083/2025 Senado "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026"

Modifíquese el 2. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones como sigue:

REDÚZCASE a las secciones:

- **1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, literal C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN en cuatrocientos mil millones de pesos (\$400.000.000.000) moneda corriente
- **1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**, literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO en trescientos treinta mil millones de pesos (\$330.000.000.000) moneda corriente
- **2201 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO en trescientos treinta mil millones de pesos (\$330.000.000.000) moneda corriente
- **0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO en cincuenta mil millones de pesos (\$50.000.000.000) moneda corriente
- **1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, literal C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, CTA PROG 1302 en cincuenta mil millones de pesos (\$50.000.000.000) moneda corriente
- **1601 POLICÍA NACIONAL**, literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO en diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000) moneda corriente
- **3601 MINISTERIO DEL TRABAJO**, literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO en cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y nueve millones trescientos setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos (\$457.739.377.942) moneda corriente
- **4601 MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD** en diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000) moneda corriente

Y **ADICIÓNASE** la suma de dichos montos: un billón seiscientos treinta y siete mil setecientos treinta y nueve millones trescientos setenta y siete mil novecientos



cuarenta y dos (\$1.637.739.377.942) moneda corriente al presupuesto de la sección
2701 RAMA JUDICIAL

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Etna Támara Argote Calderón', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

ETNA TÁMARA ARGOTE CALDERÓN
Representante a la Cámara por Bogotá
Pacto Histórico PDA

Justificación

El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicó ante el Ministerio de Hacienda un anteproyecto de presupuesto por valor de \$16.015.273.000.000, el proyecto final asigna a la Rama Judicial apenas \$10.154.912.200.000, esto es una reducción de casi 5 billones de pesos.

Dicha reducción se concentra principalmente en una disminución de los recursos estimados para **funcionamiento en 2,9 billones de pesos**, con lo cual se sacrifican la creación de 7.381 nuevos cargos permanentes, que son requeridos para poder enfrentar cambios normativos como la implementación del Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que entrará en vigencia el 2 de abril de 2026, que requiere de una parte la creación de Juzgado Laborales Municipales a los cuales el nuevo código dobla la cuantía de su competencia, al tiempo que establece la doble instancia en todos los procesos de la especialidad laboral; igualmente dicha reducción compromete la creación de la Jurisdicción Agraria, así como el cumplimiento de órdenes impartidas por la Corte Constitucional en sentencias T-341 de 2022, T-099 de 2021, Su-122 de 2022, en las cuales se exhorta al Consejo Superior de la Judicatura la conformación de medidas y planes de creación de cargos para afrontar la congestión judicial de las distintas jurisdicciones; además de la nivelación de plantas que requieren varios despachos para poder cumplir con las funciones a su cargo.

Se debe insistir en que esos 2,9 billones de pesos además comprometen la creación de 2.956 cargos que se incorporaron en el plan anual de descongestión de la Rama Judicial, conforme lo dispone el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 25 de la Ley 2430 de 2024; comprometiéndose igualmente los rubros necesarios para cumplir con la extensión de la jurisprudencia de la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 02 de noviembre de 2023 del Consejo de Estado, que ordenó la reclasificación de algunos cargos existentes en la Rama Judicial y cuyo costo se estima en **\$63.749.133.826**.

Otro componente que se encontraría afectado por dicha reducción presupuestal es el que corresponde al reconocimiento del factor salarial de la Bonificación Judicial, del cual hoy gozan 8.876 servidores judiciales de una planta de 36.810, y que se estima en un costo adicional de \$649.469 millones de pesos, para una cobertura total, debiendo destacarse en este tópico que la ausencia de reconocimiento genera un pasivo contingente por cuenta de retroactivos que supera hoy los 1,3 billones de pesos, rubro que igualmente se incorporó en el Anteproyecto y que corresponden a los fallos ejecutoriados, los cuales fueron incorporados conforme a la Circular Externa 012 del 28 de febrero de 2025 del Ministerio de Hacienda, sin embargo, en el proyecto radicado por el Gobierno no se registra rubro por este concepto.

La presente proposición pretende un ajuste presupuestal que permita subsanar el déficit en una proporción cercana al 30%, como una medida inicial para garantizar la continuidad de los procesos de fortalecimiento institucional y atender de manera parcial las obligaciones de la Rama Judicial. Este esfuerzo debe entenderse como una estrategia gradual, en la cual se prevé que durante los años 2027 y 2028 se realice el ajuste del porcentaje restante a través del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Proposiciones al Proyecto de Ley 102/2025 Cámara y 083/2025 Senado

1 mensaje

Etna Tamara Argote Calderon HR <etna.argote@camara.gov.co>20 de septiembre de 2025, 8:59 a.m.

Para: Comisión Cuarta <comision.cuarta@camara.gov.co>, Comisión Cuarta Senado <comision.cuarta@senado.gov.co>

Cordial saludo,

En virtud de los establecido en la Ley 5° de 1992 me permito presentar proposición modificatoria del Proyecto de Ley 102/2025 Cámara y 083/2025 Senado "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026"

Cordialmente

Etna Támara Argote Calderón
Representante a la Cámara

6 archivos adjuntos

-  **Sep 19 - Prop. PGN (102_2025C) - Rama judicial.pdf**
235K
-  **Sep 19 - Prop. PGN (102_2025C) - MinDeporte.pdf**
213K
-  **Sep 19 - Prop. PGN (102_2025C) - Rama judicial.docx**
243K
-  **Sep 19 - Prop. PGN (102_2025C) - MinDeporte.docx**
241K
-  **Sep 19 - Prop. PGN (102_2025C) - Defensoría.docx**
536K
-  **Sep 19 - Prop. PGN (102_2025C) - Defensoría.pdf**
283K

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA - MINISTERIO DEL DEPORTE

En virtud de lo establecido en la Ley 5° de 1992 me permito presentar proposición modificatoria al Proyecto de Ley 102/2025 Cámara y 083/2025 Senado "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026"

Modifíquese el 2. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones como sigue:

REDÚZCASE a las secciones:

- **1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, literal C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, CTA PROG 1302, en ochenta y dos mil quinientos ochenta y siete millones doscientos veinticuatro mil ciento veinticuatro pesos (\$82.587.224.124) moneda corriente
- **1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**, literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO en sesenta y siete mil millones de pesos (\$67.000.000.000) moneda corriente
- **0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN**, literal C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, en sesenta mil millones de pesos (\$60.000.000.000) moneda corriente
- **2201 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, literal A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO en cuarenta mil cuatrocientos doce millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y seis pesos (\$40.412.775.876) moneda corriente.

Y ADICIÓNENSE la suma de dichos montos: doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000) moneda corriente a la sección **4301 MINISTERIO DEL DEPORTE**, literal C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Cordialmente,



ETNA TÁMARA ARGOTE CALDERÓN
Representante a la Cámara por Bogotá
Pacto Histórico PDA

